



**TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL  
Y ADMINISTRATIVA.**

**SALA REGIONAL DEL NOROESTE II.**

**EXPEDIENTE: 1981/15-02-01-9.**

**PARTE ACTORA: ADMINISTRADORA DE  
RECURSOS DE EMPLEADOS DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DEL AGUA DE SONORA, A.C.**

**AUTORIDAD DEMANDADA: ADMINISTRACIÓN DE  
PROMOCION Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO  
"3".**

**MAGISTRADO INSTRUCTOR:  
LIC. LÁZARO FIGUEROA RUIZ.**

**SECRETARIA DE ACUERDOS:  
LIC. ANA LETICIA MARTÍNEZ MUNGUÍA.**

**MATERIA: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.**

**SENTENCIA DEFINITIVA EN VÍA SUMARIA.**

**Ciudad Obregón, Sonora, a veintiuno de junio de dos mil dieciséis.-** Vistas las constancias de autos y estando debidamente integrado el expediente en se actúa, ante el Magistrado Licenciado **LÁZARO FIGUEROA RUIZ**, Titular de la Tercera Ponencia de esta Sala Regional del Noroeste II, ante la Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, **Lic. Ana Leticia Martínez Munguía**, con fundamento en los artículos 49, 50, 51, 52 y 58-13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se procede a dictar sentencia en los siguientes términos:

**R E S U L T A N D O :**

**1°.-** Que por escrito de demanda y anexos depositados en el Servicio Postal Mexicano de Hermosillo, Sonora, con fecha 07 de julio de 2015, ingresados en Oficialía de Partes de esta Sala

2.....

el día 09 siguiente; compareció el **C. Carlos Alberto Bernal Saavedra**, en representación legal de **ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE EMPLEADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA, A.C.**, demandando la nulidad de las resoluciones contenidas en los documentos con números de control MIDE1S201200390/2, MIDE1S201200390/3, MIDE1S201200390/4 y MIDE1S201200390/5, todos de fecha 23 de marzo de 2015, emitidos por el Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento "3" de la Administración General de Servicios al Contribuyente, de México, D.F., a través de las cuales le determinó los créditos números 484469, 484470, 484471 y 484472, respectivamente, por concepto de multas, en cantidad de \$12,640.00, cada uno de ellas.

**2°.-** Mediante acuerdo de fecha 10 de julio de 2015, se admitió a trámite la demanda en la **vía sumaria**, se fijó fecha tentativa de cierre de instrucción y se ordenó correr traslado con copia simple de la misma y anexos a la autoridad demandada para que produjera su contestación; la que se verificó mediante oficio número 600-61-2015-5944 de fecha 26 de agosto de 2015, ingresado en esta Sala el mismo día, a través del cual propuso el sobreseimiento del presente juicio y cautelarmente sostuvo la legalidad de las resoluciones impugnadas.

**3°.-** Por auto de fecha 01 de septiembre de 2015, se tuvo por contestada la demanda; concediéndose dentro de este último,

**3.....**

plazo para que la actora formulara la ampliación correspondiente; derecho ejercido mediante escrito ingresado en esta Sala, previo depósito, el día 15 de septiembre de 2015, a través del cual además, formuló aclaración respecto de los documentos con los cuales se les corrió traslado.

**4º.-** En atención a las manifestaciones de la parte actora, mediante acuerdo de fecha 20 de octubre de 2015, se ordenó correr traslado a ésta con los documentos que adujo no se acompañaron, otorgándose de nueva cuenta plazo para que formulara su ampliación a la demanda, prerrogativa que ejerció mediante escrito ingresado en esta Sala, previo depósito, el día 05 de diciembre de 2015,

**5º.-** Por auto de fecha 08 de diciembre de 2015, se tuvo por formulada la ampliación de la demanda, ordenándose correr traslado a las autoridades para que formularan la contestación a la ampliación correspondiente; prerrogativa que fue agotada mediante oficio número 600-55-2015-027 de fecha 05 de enero de 2016, recibido en esta Sala el día siguiente.

**6º.-** Por acuerdo del 08 de enero de 2016, se tuvo por contestada la ampliación a la demanda; asimismo y al no existir cuestión pendiente de desahogar, se otorgó a las partes, el plazo de

#### **4.....**

ley para la formulación de los alegatos correspondientes; prerrogativa que fue ejercida únicamente por la autoridad.

**7°.-** Posteriormente, mediante acuerdo del 10 de marzo de 2016, esta Instrucción ordenó dejar sin efectos el diverso auto dictado el 08 de enero de 2016, únicamente en lo que respecta al plazo para formular alegatos, ello dada la imprevisión del actuario de la adscripción, en correrle traslado a la actora, con los documentos que la autoridad acompañó a su oficio de contestación; otorgándose de nueva cuenta plazo a la actora, para que ampliara su demanda; prerrogativa que ejerció mediante escrito ingresado en esta Sala, previo depósito, el día 26 de abril de 2016.

**8°.-** Por auto de fecha 27 de abril de 2016, se tuvo por formulada la ampliación de la demanda, ordenándose correr traslado a las autoridades para que formularan la contestación a la ampliación correspondiente; prerrogativa que fue agotada mediante oficio número 600-55-2016-4010 de fecha 11 de mayo de 2016, recibido en esta Sala el mismo día.

**9°.-** Por acuerdo del 16 de mayo de 2016, se tuvo por contestada la ampliación a la demanda; asimismo y al no existir cuestión pendiente de desahogar, se otorgó a las partes, el plazo de ley para la formulación de los alegatos correspondientes; prerrogativa que fue ejercida por ambos litigantes.

5.....

**10°.-** Por auto de fecha 20 de junio de 2016, se declaró cerrada la instrucción en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 58-12, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **por lo que se procede a emitir la sentencia que en derecho corresponde.**

**C O N S I D E R A N D O:**

**PRIMERO.-** De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, fracción XII, 31, 32, y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 58-2, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 21, Fracción II y 22 Fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de los cuales se determina los límites territoriales, denominaciones, número y sede de sus Salas Regionales, esta Sala Regional del Noroeste II, es competente para resolver el presente juicio.

**SEGUNDO.-** La existencia de las resoluciones impugnadas se encuentra debidamente acreditada en autos, ya que la parte actora las exhibió conjuntamente con su demanda y por el reconocimiento en el que incurrió la autoridad demandada

respecto de éstas al producir su contestación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 93, fracción II, 129, 200 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en Materia Fiscal.

**TERCERO.-** En primer orden, este Juzgador procede al análisis de la única causal de improcedencia que hace valer la autoridad en su oficio de contestación de demanda, a través de la cual aduce que deberá de sobreseerse el presente juicio, en virtud de intentarse en contra de actos consentidos, actualizándose con ello la hipótesis prevista en el artículo 8, fracción IV, en relación con el diverso 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Para quien suscribe el presente fallo, resulta inoportuna la causal invocada por la autoridad, en atención a que no debemos olvidar que la parte actora manifestó el no haber sido notificado legalmente las resoluciones cuya impugnación pretende; **ante lo cual la representación de la demandada, procedió a exhibir en el presente juicio una serie de documentales que deberán ser valoradas por este Juzgador con posterioridad y no precisamente para efectos de resolver a priori la procedencia de la presente instancia;** debiéndose por tanto desestimarse la causal en estudio, toda vez que no es el momento oportuno para realizar pronunciamiento alguno respecto de esas actuaciones

7.....

administrativas, pues las mismas atañen al fondo del asunto; por lo que resultaría del todo incongruente que este Resolutor calificara de manera previa las actuaciones exhibidas por la autoridad para resolver la causal de improcedencia, cuando forman parte de la litis del presente juicio, **por lo que no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio.**

Resulta aplicable al caso la Tesis de Jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro, texto y antecedentes de invocan a continuación: No. Registro: 39,967, Época: Quinta, Instancia: Pleno, Fuente: R.T.F.J.F.A., Año V, No. 57, Septiembre 2005, Tesis: V-J-SS-78, Página 7:

**“SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBE DESESTIMARSE.-** Cuando la autoridad plantea el sobreseimiento del juicio con argumentos encaminados a demostrar que no le asiste la razón a la actora en cuanto al fondo del negocio, la causal de sobreseimiento debe desestimarse, ya que el análisis del fondo sólo puede darse una vez que se analicen los conceptos de anulación y no antes. (1)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/22/2005)

PRECEDENTES:

V-P-SS-621

Juicio No. 1827/02-17-10-9/899/03-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de marzo de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis

Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.

(Tesis aprobada en sesión de 23 de marzo de 2004)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo I. No. 49. Enero 2005. p. 30

Por virtud de lo anterior, es de desestimarse la causal de improcedencia esgrimida por la autoridad demandada, **por lo que no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio, en atención a la misma.**

**CUARTO.-** Ahora bien, en virtud de las documentales que la autoridad acompañó a su oficio de contestación a fin de acreditar la legal existencia y notificación de las resoluciones cuya impugnación pretende el actor; este Juzgador procede al análisis de los argumentos propuestos por éste en sus escritos de ampliación.

Al respecto, el promovente sostuvo de manera medular, que las constancias de notificación relativas a las multas impugnadas, no cumplen con los requisitos previstos en los artículos 134 fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación; dado que no se encuentran debidamente circunstanciadas.

En su réplica, la defensa fiscal sostuvo la validez de las notificaciones cuestionadas, aduciendo que las mismas cumplen a cabalidad con lo ordenado en los citados dispositivos jurídicos.



9.....

Para quien suscribe el presente fallo, resultan **fundados** los argumentos expuestos por el actor en su escrito de ampliación, a través de los cuales sostiene que resultan ilegales las notificaciones practicadas por la demandada a fin de hacer de su conocimiento las resoluciones contenidas en los documentos con números de control **MIDE1S201200390/2, MIDE1S201200390/3, MIDE1S201200390/4 y MIDE1S201200390/5, todos de fecha 23 de marzo de 2015**, a través del cual el Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento "3" de la Administración General de Servicios al Contribuyente, de México, D.F., le determinó los créditos números **484469, 484470, 484471 y 484472**, por concepto de multas; lo anterior, en atención a las consideraciones siguientes:

En primer término, es preciso manifestar lo que establecen los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal Federal, respecto a las formalidades de las notificaciones:

**Artículo 134.-** Las notificaciones de los actos administrativos se harán:

I. Personalmente o por correo certificado o electrónico, con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.

## 10.....

En el caso de notificaciones por correo electrónico, el acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como firma electrónica del particular notificado, la que se genere al utilizar la clave que el Servicio de Administración Tributaria le proporcione para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.

[ . . ]

**Artículo 137.-** Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.

Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este Código.

De la interpretación armónica y congruente de lo establecido en los preceptos legales transcritos, se desprende que las notificaciones de los actos administrativos se harán personalmente, por correo certificado o electrónico con acuse de

**11.....**

recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.

Asimismo, cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.

Cabe agregar, que si bien el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, no alude en forma expresa al levantamiento de una acta pormenorizada, en la cual se asienten los hechos, tanto en la primera búsqueda como en la diligencia de notificación; sin embargo, estos requisitos se desprenden tácita y lógicamente del propio precepto, pues son datos ineludibles que aunque expresamente no se consignan en la ley, la redacción del precepto implícitamente los contempla.

Por ello, es evidente que las notificaciones practicadas con una persona distinta al interesado o su representante legal, como aconteció en la especie, deben sujetarse a las formalidades siguientes: **1.-** El notificador al constituirse en el domicilio correspondiente requerirá la presencia de la persona a quien

legalmente deba notificar el acto administrativo, o bien, la de su representante legal y, en caso de no encontrarlo le dejará citatorio para que espere a una hora fija del día hábil siguiente; **2.-** En el día y a la hora señalada en el citatorio de referencia, el notificador se constituirá de nueva cuenta en el domicilio de la persona a quien va dirigido el acto a notificar y requerirá su presencia o la de su representante legal y en caso de no encontrarlo, llevará a cabo la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto, con un vecino; y **3.-** El notificador tiene la obligación de hacer constar fehacientemente lo ocurrido durante la diligencia relativa, es decir, debe asentar que precedió el citatorio y que éste no fue atendido por el particular o por su representante legal. **Lo anterior, con el objeto de que el interesado conozca el motivo por el cual se practicó la notificación con una persona distinta.**

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.15/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

Novena Época  
Registro: 189933  
Instancia: Segunda Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIII, Abril de 2001  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 15/2001  
Página: 494

**13.....**

**NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).** Si bien es cierto que dicho precepto únicamente prevé la obligación del notificador de levantar razón circunstanciada de las diligencias, tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y, en concreto, cuando la persona que se encuentre en el lugar o un vecino con quien pretendan realizarse aquéllas, se negasen a recibir la notificación, también lo es que atendiendo a las características propias de las notificaciones personales, en concordancia con las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, la razón circunstanciada debe levantarse no sólo en el supuesto expresamente referido, sino también al diligenciarse cualquier notificación personal, pues el objeto de las formalidades específicas que dispone el numeral en cita permite un cabal cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados.

Contradicción de tesis 87/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primer y Segundo del Sexto Circuito, ahora Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 15/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de marzo de dos mil uno.

Ahora bien, a fojas 83 a 85 de autos, se encuentra visible el acta de notificación, a través de la cual la autoridad pretendió hacer del conocimiento del promovente, las multas determinantes de los créditos **484469, 484470, 484471 y 484472;** documental a la que este Juzgador le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, al tener la naturaleza de documento público y de cuyo contenido se advierte que la autoridad inobservó el requisito de circunstanciación exigido por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, en concordancia con la jurisprudencia 2ª/J.15/2001, transcrita con antelación y que es de aplicación obligatoria para este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en virtud de que no cumplió con su principal finalidad, que fue hacer del conocimiento de la actora, la existencia de los referidos actos de molestia.

Es así, porque de la constancia de notificación cuestionada, localizable como antes de indicó, a fojas 83 a 85 de autos; este Juzgador advierte que el funcionario actuante **fue omiso en circunstanciar pormenorizadamente, la razón por la cual la diligencia se llevó a cabo con un tercero.**

En efecto, del documento en análisis no se desprende cómo fue que el notificador **se constató de la ausencia del**

15.....

**interesado**, para entonces entender la diligencia con el tercero que se encontraba en el domicilio, limitándose a señalar que ***no se encontraba el representante legal, sin pormenorizar las razones de su ausencia***; por lo que evidentemente se incumple con el requisito de debida circunstanciación exigido por el ordinal 137, del Código Fiscal de la Federación.

En ese orden de ideas y toda vez que las actas de notificación cuestionadas no cuenta con una debida circunstanciación **en torno a la ausencia del destinatario de los actos de molestia**, consecuentemente no queda justificado el hecho de que dicha diligencia se haya entendido con un tercero.

Esto es, para considerar legalmente practicadas las notificaciones, el diligenciario **debió circunstanciar en forma pormenorizada, lo relativo a la ausencia del interesado o su representante legal, lo que incluye el cercioramiento de dicha ausencia**, esto es, la razón de la no comparecencia del destinatario de los actos de molestia; siendo insuficiente el que se haya señalado que éste no se encontraba, pues con ello no se tiene conocimiento del por qué no pudo estar presente el día y la hora señaladas en el citatorio entregado el día hábil que antecedió al desarrollo de la diligencia.

En mérito de lo anterior, y de conformidad con lo previsto por el penúltimo párrafo del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; lo procedente resulta tener al actor como conocedor de los documentos con números de control **MIDE1S201200390/2, MIDE1S201200390/3, MIDE1S201200390/4 y MIDE1S201200390/5, todos de fecha 23 de marzo de 2015,** a través del cual el Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento "3" de la Administración General de Servicios al Contribuyente, de México, D.F., le determinó los créditos números **484469, 484470, 484471 y 484472,** por concepto de multas; la fecha en que le fueron dadas a conocer por este Juzgador, esto es, el día 12 de abril de 2016; lo que permite proceder al análisis de los argumentos propuestos por el actor en contra de los citados actos administrativos; lo que se realiza al tenor de lo siguiente:

**QUINTO.-** Por abordar un tema de competencia, cuyo estudio es de orden preferente; este Juzgador procede al análisis del tercer concepto de impugnación, a través del cual cuestiona la facultad material de la autoridad demandada, por no precisarse los preceptos para emitir multas en los términos en que se hizo; cuestión que incluso, es de orden público, y por ende, de estudio oficioso para este Juzgador.



17.....

En su réplica, la defensa fiscal sostuvo que son infundados los argumentos de agravios de su oponente, advirtiendo para ello que del análisis que se haga a las resoluciones emitidas por la Administración de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento "3", se podrá observar que ésta fundó debidamente su competencia material, al invocar los artículos 9, fracciones XXXI y XXXVII y 10, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, así como los diversos numerales 14 fracción XXXII y XL y 15, párrafos primero, apartado B), fracción II, inciso a) del mismo reglamento.

Para el suscrito Magistrado, son **fundados** los argumentos de anulación en estudio y, por ende, **suficientes** para desvirtuar la legalidad y validez de las resoluciones que por esta vía se controvierten, en atención a las consideraciones siguientes:

En primer término, debe señalarse que respecto a la garantía de legalidad y de certeza jurídica, los artículos 16 Constitucional y 38, del Código Fiscal de la Federación, estatuyen los requisitos legales que los actos de autoridad deben reunir, mismos que a la letra prevén lo siguiente:

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

**“Artículo 16.-** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento

escrito de la autoridad competente, que funde y motiva la causa legal del procedimiento.

(...)"

**CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.**

**“Artículo 38.** Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:

**I.** Constar por escrito en documento impreso o digital.

Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios.

**II.** Señalar la autoridad que lo emite.

**III.** Señalar lugar y fecha de emisión.

**IV.** Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

**V.** Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

(...)"

Como se advierte de la anterior transcripción, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, es claro en señalar que todos los actos administrativos deben constar por escrito, señalar lugar, fecha de emisión y la autoridad que los emite, estar debidamente fundados y motivados, expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate y ser expedidos por autoridad competente, lo cual constituye un reflejo de la garantía de la debida fundamentación y motivación que deben cumplir los actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de los particulares conforme al primer párrafo del artículo 16 Constitucional.

19.....

Resulta aplicable al caso que nos ocupa, la Tesis de Jurisprudencia número: VI.2o. J/43 de la Novena Época en Materia Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769, que a la letra dice:

**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.** La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Sobre el tema relativo al cumplimiento de la garantía de fundamentación de la competencia por parte de la autoridad en los actos de molestia, el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis: P./J. 10/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 77, Mayo de 1994, Octava Época, Página 12, ha determinado lo siguiente:

**“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.-** Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su

actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.”

Del criterio jurisprudencial comentado, se desprende, que nuestro máximo tribunal de justicia ha precisado que conforme a las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación.

En el mismo orden de ideas, la Segunda Sala en la diversa tesis de jurisprudencia número 2ª/J.57/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página 31, ha determinado que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de **exactitud y precisión** en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la

21.....

exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios.

En efecto, respecto a la incompetencia en estudio, se tiene que en las resoluciones contenidas en los documentos con números de control MIDE1S201200390/2, MIDE1S201200390/3, MIDE1S201200390/4 y MIDE1S201200390/5, todos de fecha 23 de marzo de 2015, el Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento "3"; citó entre otros preceptos, el artículo 2, primer párrafo, apartado C, fracción II, 10, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9, primer párrafo, fracciones XXXI y XXXVII, y último párrafo, 14, primer párrafo fracciones XXXII y XL, y 15, párrafos primero, apartado B), fracción II, inciso a) del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, disposiciones legales que al efecto establecen:

**“Artículo 2.-** Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria contará con las siguientes unidades administrativas:

C. Unidades Administrativas Regionales:

I.- ...

II.- Administraciones Locales.

.....”

**Artículo 9.-** Los Administradores Generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

...

**XXXI.-** Imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia.

...

Las unidades administrativas regionales tendrán la sede que se establece en el artículo 37 de este Reglamento y ejercerán su competencia dentro de la circunscripción territorial que al efecto se determine en el acuerdo correspondiente, con excepción de la facultad de notificar y la de verificación en materia de Registro Federal de Contribuyentes y de cualquier padrón contemplado en la legislación fiscal y aduanera, las cuales podrán ejercerse en todo el territorio nacional. Asimismo, dichas unidades podrán solicitar a otras unidades con circunscripción territorial distinta, iniciar, continuar o concluir cualquier procedimiento y, en su caso, realizar los actos jurídicos correspondientes.”

**“Artículo 10.-** Los Administradores Centrales, Regionales, Locales y de las Aduanas; los Coordinadores, y los Administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

I.- Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este Reglamento.

...

**Artículo 14.- Compete a la Administración General de Servicios al Contribuyente:**

(...)

**XXXII.-** Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cumplan con la obligación de presentar declaraciones, así como solicitar a dichas personas y a terceros los datos, informes o documentos para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional, definitivo, del ejercicio y complementarias.

(...)

**XL.-** Requerir la presentación de declaraciones, avisos, documentos e instrumentos autorizados, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos y simultánea o sucesivamente hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate o a la

**23.....**

que resulte determinada por la autoridad, así como requerir la rectificación de errores u omisiones contenidos en las declaraciones, solicitudes, avisos, documentos e instrumentos autorizados.

9. Administradores Locales de Servicios al Contribuyente.

...

**Artículo 15.-** Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Servicios al Contribuyente ejercer las facultades que a continuación se precisan:

...

**B.** A la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento y a las unidades administrativas adscritas a la misma:

...

**II.-** Administraciones de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento "1", "2", "3" y "4":

a) Las señaladas en las fracciones XXV, XXVI, XXXII y XL del artículo anterior de este Reglamento.

...."

En efecto, como se desprende de los numerales en cita, corresponde a los Titulares de las Administraciones de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento; -entre otras atribuciones- las de: a) Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cumplan con la obligación de presentar declaraciones; b) Requerir la presentación de declaraciones, avisos, documentos e instrumentos autorizados, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos y simultánea o sucesivamente hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las

seis últimas declaraciones de que se trate o a la que resulte determinada por la autoridad; y, c) Imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia.

Así las cosas, es de inferirse claramente que las Administraciones de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, pueden requerir la presentación de declaraciones, avisos y documentos, entre otros, y, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos y simultánea o sucesivamente hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate o a la que resulte determinada por la autoridad; sin embargo de las hipótesis citadas, **no se desprende la atribución de imponer multas por no haber cumplido con un requerimiento de autoridad,** situación que resulta de trascendencia a la garantía fundamental de legalidad y, de certeza jurídica.

En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite; de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise



25.....

exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

En tal virtud, al no haberse citado dicha disposición u otra diversa que confiriera certidumbre al particular de que la demandada pueda imponer multas **por no haber cumplido con un requerimiento de autoridad**, es inconcuso que al enjuiciante no se le dotó de los elementos que le conferían certeza de que el Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, fuese competente para sancionarlo en los términos realizados, insistiéndose en que no debe quedar lugar a dudas ni ambigüedades en lo que respecta a la legitimación de la competencia de la autoridad.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto reza lo siguiente:

Novena Época  
 No. Registro: 177347  
 Instancia: Segunda Sala  
 Jurisprudencia  
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Septiembre de 2005  
 Materia(s): Administrativa  
 Tesis: 2a./J. 115/2005  
 Página: 310

**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORQUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.** De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o

**27.....**

territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil cinco.

A mayor abundamiento, es insuficiente que se diga que la autoridad está legitimada para imponer multas en las materias de su competencia; pues tal afirmación debió de haber quedado acreditada en autos; y, más aún de los preceptos en cita únicamente su pudo comprobar que cuando la demandada hubiera ejercido la facultad de requerir la presentación de declaraciones, y, los obligados no la hubieran presentado en los plazos respectivos, entonces estarían en aptitud legal de en forma simultánea o sucesivamente hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las

seis últimas declaraciones de que se trate o a la que resulte determinada por la autoridad, pero no de aplicar multas.

Ahora bien, al caso conviene indicar que si bien es cierto que el artículo 41, párrafo primero, fracción I del Código Fiscal de la Federación, faculta a las autoridades fiscales a imponer multas cuando las personas obligadas a presentar sus declaraciones no lo hagan dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, ello no implica que se esté refiriendo a las Administraciones de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, sino a las autoridades fiscales en general, sin que con ello se fije una competencia material en lo particular, aún más, es de reiterarse que la demanda no tiene atribuciones para imponer multas, motivadas en el hecho de que el Servicio de Administración Tributaria, determinó multas por no haber cumplido un requerimiento.

Sirve de apoyo la tesis VI-TASR-XIII-127, que dice:

**ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES ILEGAL LA MULTA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN DICHO NUMERAL, SI LA CONDUCTA INFRACTORA CONSISTIÓ EN QUE NO SE CUMPLIÓ EL REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN MENSUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS.-** Si del contenido del artículo 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que el legislador estableció como supuestos de infracción, relacionados con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos e información, los siguientes: a) no proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha ley, b) presentar la información en forma incompleta, y c) presentar dicha

**29.....**

información con errores; es inconcuso que cualquiera de las conductas antes indicadas conduciría a que la autoridad fiscal impusiera al contribuyente infractor la sanción prevista en el artículo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, por lo que si la conducta que motivó la comisión de la infracción, consistió en que la actora no cumplió en el plazo establecido en el requerimiento que le fue notificado con la presentación de la información de operaciones con terceros, entonces, la multa impuesta con fundamento en el artículo 81, fracción XXVI, del Código invocado, resulta ilegal, al no adecuarse los motivos que tomó en consideración la enjuiciada para su imposición con tal fundamento legal, puesto que no contempla la conducta realmente sancionada en la resolución controvertida; ya que el legislador en la fracción I del numeral en comento, dispuso como un diverso tipo de infracción relacionada con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos e información, el no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar las declaraciones, solicitudes, los avisos o las constancias, o cumplirlos fuera del plazo señalados en los mismos, sin que la autoridad hacendaria hubiera invocado tal fracción en el cuerpo de la resolución administrativa impugnada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 357/11-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de julio de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yáñez Arroyo.

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 446

En tal orden de ideas, lo procedente es declarar la nulidad lisa y llana de la multas impugnadas, al no haberse citado el fundamento exacto para imponer multas; esto con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

Novena Época

Registro: 172182

Instancia: Segunda Sala

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Junio de 2007

Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 99/2007

Página: 287

**NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.** En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la jurisprudencia citada, consistente en que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente fundamentación legal.

31.....

Cabe señalar que en este mismo sentido, se pronunció la Primera Ponencia de esta Sala Regional, al emitir la sentencia con fecha 02 de mayo de 2016, en el expediente 260/16-02-01-1.

**SEXTO.-** En atención a la violación cometida por la autoridad, este Juzgador se abstiene de entrar al estudio y análisis de los demás conceptos de impugnación que hace valer el actor en su demanda, en virtud de que cualquiera que fuera el resultado de los mismos en nada variaría el sentido del presente fallo y la nulidad lisa y llana declarada.

Por lo expuesto y, de conformidad con lo establecido por los 49, 50, 51, fracciones I y II y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se:

**R E S U E L V E :**

**I.-** Resultó **inoportuna** la solicitud de sobreseimiento planteada por la autoridad demandada; por ende;

**II.-** **No es de sobreseerse ni se sobresee** el presente juicio. Por otro lado,

**III.-** El actor **probó su acción** en consecuencia;

**IV.-** Se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas, cuyas características quedaron precisadas en el Resultando Primero del presente fallo.

**V.- NOTIFÍQUESE.**

Así lo resolvió y firma el C. Magistrado **LÁZARO FIGUEROA RUIZ**, Titular de la Tercera Ponencia de esta Sala Regional del Noroeste II, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada **ANA LETICIA MARTÍNEZ MUNGUÍA**, con quien se actúa y da fe.

---

**MAG. LÁZARO FIGUEROA RUIZ.**  
**TITULAR DE LA TERCERA PONENCIA.**

---

**LIC. ANA LETICIA MARTÍNEZ MUNGUÍA.**  
**SECRETARIA DE ACUERDOS.**

**LFR/ALMM**